

Protesta de indignados en Plaza de Cataluña, Barcelona, 29-5-11 (Juls Ibañez/Demotix/Corbis/Latinstock)

La persistente crisis que azota a la Unión Europea genera resentimientos entre sus socios, en particular contra Alemania. Las diferencias entre los modelos de capitalismo de los países del Norte y del Sur ponen en riesgo la integración continental.

Consecuencias de la unión económica y monetaria

Una Europa desgarrada

por Wolfgang Streeck*

Después de la guerra, la República Federal de Alemania nunca alimentó el proyecto de regir Europa. Todos sus dirigentes políticos, cualquiera fuera su orientación, pensaban que su país tenía un problema fundamental respecto de sus vecinos: era demasiado grande para despertar afecto y demasiado pequeño para inspirar temor. Por lo tanto, necesitaba fundirse en una entidad europea más amplia, que dirigiría de común acuerdo con otras naciones como Francia. Mientras Alemania disponía de un acceso a los mercados extranjeros, mientras podía aprovisionarse de materias primas y exportar sus productos manufacturados, no se preocupaba en absoluto de conquistar un lugar en la escena internacional. La integridad del caparazón europeo revestía tal importancia para el canciller Helmut Kohl (1982-1998), que cada vez que se producían fricciones entre los socios, rápidamente aportaba los medios materiales (es decir, pagaba la cuenta) para salvar la unidad europea, o al menos, su imagen.

El gobierno de Angela Merkel enfrenta hoy en día una situación muy distinta. A más de siete años de iniciada una crisis financiera cuyo fin no está a la vista, todos los países europeos e incluso de otras latitudes, mi-

ran a Alemania en busca de una solución y, por lo general, esperan una solución al estilo Kohl. Ahora bien, los problemas actuales son demasiado pesados para resolverlos con sólo meter la mano en el bolsillo. La diferencia entre Merkel y su predecesor, no es que ella aspire a convertirse en la Führerin de Europa: es la época la que la obliga –le guste o no– a salir de entre bambalinas para ocupar el centro del escenario europeo.

Las dificultades son considerables. En el frente europeo, la integración se transformó en una catástrofe política y económica. Y Alemania, que se convirtió en un actor lo suficientemente importante para que se la acuse de todos los males, sigue siendo demasiado pequeña para suministrar los remedios. En el frente interno, el consenso centrista amenaza con derrumbarse.

Dos modelos enfrentados

En Europa, los años que siguieron a la crisis monetaria acabaron con la simpatía que los gobiernos alemanes de posguerra se habían ganado, en mayor o menor medida, entre sus vecinos. En los países mediterráneos, y en cierta medida en Francia, Alemania nunca ha sido tan detestada desde 1945 como ahora. Innumerables caricaturas presentan a sus dirigentes vestidos con el uniforme de la Wehrmacht y luciendo la cruz gamada. Para los candida-

tos tanto de izquierda como de derecha, el método más seguro de ganar una elección es hacer campaña contra Alemania y su canciller, Angela Merkel.

En el Sur de Europa, la adopción de la “flexibilización cuantitativa” (1) por parte del Banco Central Europeo (BCE) fue aplaudida como una victoria sobre Berlín. En Italia, Mario Draghi, a pesar de ser un ejecutivo de Goldman Sachs, y ferviente defensor del neoliberalismo, es aclamado como un héroe nacional porque habría logrado engañar varias veces a “los alemanes”. El nacionalismo vuelve a surgir en toda Europa, incluso en Alemania, otrora el país menos nacionalista de todos. La política exterior de las naciones del Sur de Europa se resume actualmente a tratar de obtener concesiones de Alemania, en nombre del interés nacional, de la “solidaridad europea”, e incluso de la humanidad toda. Nadie sabe cuánto tiempo será necesario para curar las heridas causadas por la Unión Europea en las relaciones entre Alemania y países como Italia o Grecia.

Por una ironía de la historia, que no debe haber pasado desapercibida para la canciller, la Unión Económica y Monetaria (UEM) que debía consolidar definitivamente la unidad europea amenaza ahora con dinamitarla. Los dirigentes políticos alemanes comienzan a entender que el conflicto no reside en el salvataje del Estado griego o de los bancos franceses (y alemanes), y que una hábil intervención quirúrgica no logrará revivir la unidad. Al contrario, tiene que ver con la estructura misma de la zona euro, que refina sociedades muy disímiles, con instituciones, prácticas y culturas muy diversas, reflejadas en los diferentes contratos sociales que regulan las relaciones entre el capitalismo moderno y la sociedad. A esas economías políticas divergentes corresponden regímenes monetarios distintos (2).

Veámoslo esquemáticamente. Los países del Mediterráneo desarrollaron un modelo de capitalismo en el cual el crecimiento se basa sobre todo en la demanda interna. Si es necesario, se la estimula por medio de una inflación alimentada por los déficits públicos y alentada por poderosos sindicatos garantes de la seguridad del empleo, sobre todo en el sector público. La inflación permite a los Estados tomar préstamos con mayor facilidad a la vez que devalúan su deuda. Esos países poseen además un sistema bancario público o semi-público fuertemente regulado. Todos estos elementos combinados garantizan en teoría una relativa armonía entre los intereses de los trabajadores y el de los empleadores, en particular en las pequeñas empresas que venden sus productos en el mercado interno. Pero la paz social tiene como contrapartida un déficit de competitividad en el plano internacional. Déficit que hay que compensar de vez en cuando devaluando la moneda nacional, en detrimento de los exportadores extranjeros. Esta política, por supuesto, exige conservar la soberanía monetaria.

Las economías del Norte de Europa, y en primer lugar la de Alemania, funcionan de otra manera. Como su crecimiento depende de su éxito en los mercados extranjeros, son hostiles a la inflación. Esto vale también para los trabajadores y los sindicatos, sobre todo actualmente, cuando cualquier alza en los costos puede derivar en deslocalizaciones. Una economía de este tipo no necesita poder devaluarse. Mientras que los países mediterráneos –incluida Francia, en cierta medida– aprovecharon en el pasado su flexibilidad monetaria, países como Alemania se acostumbraron lo más bien a una política monetaria rigurosa. Es por eso que manifiestan también su hostilidad hacia la deuda, aun cuando, debido a su escaso nivel de endeudamiento, obtienen generalmente tasas de interés bajas. Y como pueden vivir sin flexibilidad monetaria, evitan el riesgo de explosión de burbujas en los mercados de acciones. Por último, esta política beneficia a los ahorristas, que son mayoría. El dicho “Erst sparen, dann kaufen” (“Primero ahorrar, luego comprar”) resume perfectamente la actitud tradicionalmente aconsejada por las instituciones político-económicas alemanas.

Entonces, un régimen monetario unificado no puede beneficiar a la vez a economías basadas en el ahorro y la inversión, como las de Europa del Norte, y a economías fundadas en el préstamo y el gasto público, como las de Europa del Sur. Por lo tanto, uno de los dos modelos deberá, para acercarse al otro, reformar su siste-

ma de producción y, a la vez, el pacto social sobre el que se basa. Actualmente los tratados obligan a los países mediterráneos a ser "competitivos", bajo la batuta de una Alemania garante del rigor monetario. Pero no es eso lo que sus gobiernos desean o pueden hacer, al menos en el corto plazo. En consecuencia, dos líneas se enfrentan en el seno de la zona euro en un combate tanto más violento, cuanto que concierne no sólo a los medios de subsistencia, sino también al modo de vida de los pueblos. Muestra de ello son los clichés que oponen los "griegos perezosos" a los "austeros alemanes" que "viven para trabajar en lugar de trabajar para vivir" y aparecen como inflexibles gendarmes dado que defienden a la vez los tratados y su propio marco capitalista. Los intentos de los europeos del Sur por obtener una flexibilización del euro que les permita volver a las tasas de inflación, los déficits públicos y las devaluaciones en los que se basaban sus economías, chocan con la oposición de los Estados y los electores del Norte, que se niegan a seguir prestando dinero como último recurso a sus vecinos meridionales.

Una batalla técnica y moral

No obstante, a pesar de que los países de la zona euro no puedan converger, tampoco desean separarse, al menos por ahora: los países exportadores de Europa del Norte veneran las tasas de cambio fijas, mientras que los países del Sur quieren tasas de interés lo más bajas posible, a cambio de lo cual aceptarían una limitación de los déficits, esperando que sus socios se muestren más clementes que los mercados financieros. Actualmente, Alemania y sus aliados tienen las cartas en la mano. A más largo plazo, nadie puede permitirse perder la batalla: el perdedor se vería obligado a reconstruir su economía política y atravesar un período de transición largo, incierto y tumultuoso. Los países del Sur podrían verse así condenados a organizar su mercado laboral como en Europa del Norte, y los alemanes a poner fin a su manía de ahorrar, que sus socios consideran destructora y egoísta.

En ese sentido, se puede considerar que el programa de "flexibilización cuantitativa" adoptado por el BCE, dirigido oficialmente a elevar la tasa de inflación al 2%, se inscribe en una estrategia ventajosa para los países mediterráneos. De hecho, la medida provocó inmediatamente una baja en la tasa de cambio de la moneda única. Cabe recordar que Enrico Letta, durante su corta presidencia del Consejo italiano (abril de 2013 a febrero de 2014), despotricaba contra el nivel de ese "maldito euro", que impedía la reactivación económica de su país. Problema: tal devaluación favorece sobre todo a los países exportadores como Alemania y no mejora en nada la situación de las economías más débiles. A más largo plazo, podría incluso desatar una carrera devaluatoria mundial. Y si bien, en Alemania, las industrias exportadoras no se quejarían de una nueva mejora de su competitividad, los ahorristas en cambio tendrían que soportar durante bastante tiempo tasas de interés negativas.

Los debates sobre el futuro del régimen monetario europeo son tanto morales como técnicos; y, en ese plano, debe subrayarse que ninguna de esas formas de capitalismo es superior a las otras. La implantación del capitalismo en la sociedad, asunto de improvisación y de compromiso, jamás resulta plenamente satisfactoria desde ningún punto de vista. Ciertamente, eso no impedirá que los partidarios de cada modelo nacional consideren que los otros modelos son deficientes, en base a que el suyo sería natural, racional y conforme a los valores sociales más elevados. Así, los alemanes no comprenden que cuando instan a los griegos a "reformular" su economía política, es decir, a reformarse a sí mismos, para terminar con el despilfarro de la corrupción, les están pidiendo de hecho reemplazar la corrupción tradicionalmente arraigada en la sociedad griega, por otra: la corrupción moderna y financiarizada al estilo de Goldman Sachs, propia del capitalismo contemporáneo.

Los violentos conflictos ideológicos y económicos que desgarran Europa y fomentan los nacionalismos no habrán de apagarse rápidamente. Suponiendo incluso que la austeridad logre hacer más competitiva a Europa del Sur, se estima que producirá también en los

países deudores una baja en el nivel de vida del orden del 20 al 30% respecto de la situación anterior a 2008. Se les impone ese régimen asegurándoles que la liberalización de los mercados reforzará sus economías, que entonces podrán recuperar el terreno perdido y reducir las diferencias de ingresos: pero se trata de una quimera, habida cuenta del peso de las ventajas acumuladas que operan en los mercados (3). Las disparidades regionales, agravadas por la austeridad, deberán ser atendidas por medio de una solución política, en el seno de la zona euro, siguiendo el modelo de redistribución adoptado por Italia para el Mezzogiorno y por Alemania para los nuevos Länder. Sin embargo, el alrededor de 4% de Producto Interno Bruto que ambos países destinan a esas regiones, no logra impedir que aumente la brecha entre los ingresos interregionales (4).

Las disparidades económicas producirán conflictos entre los Estados miembros de la zona euro y dentro mismo de ellos. Los países del Sur reclamarán programas de crecimiento, un "Plan Marshall europeo", políticas regionales para ayudarlos a crear una infraestructura competitiva y una solidaridad material a cambio de su adhesión al mercado único y a la unidad europea en general. Los gobiernos del Norte no podrán, por razones económicas y políticas, suministrar más que una pequeña parte de los fondos necesarios (5). A cambio, exigirán el derecho a controlar cómo será utilizado su dinero, aunque más no sea por razones de política interna: su oposición podrá llenarse la boca acusándolos de derroche, clientelismo y corrupción. Los Estados meridionales resistirán el avance de los del Norte sobre su soberanía, a la vez que criticarán su avaricia. Alemania, el más grande y sin dudas el más rico de los países miembros, será condenada por su imperialismo político y su egoísmo económico, sin poder hacer gran cosa: los electores no dejarán a sus gobiernos ayudar a los países del Sur sin condiciones y se negarán a financiar una política regional europea, cuando aún pagan por la ex Alemania del Este.

Miedo a la implosión

¿Durante cuánto tiempo la gran coalición de Angela Merkel logrará calmar tanto a sus socios europeos como a sus electores? En poco tiempo podrían agotarse todos sus recursos. Las industrias exportadoras alemanas y sus sindicatos hicieron de la defensa de la unión monetaria una prioridad absoluta y, con el apoyo de una izquierda euro-idealista, sacralizaron el euro (6). Siempre a la escucha de sus apoyos, la canciller pronunció una célebre sentencia: "Si el euro fracasa, fracasa Europa" (7). Por lo tanto Merkel se resignó a hacer dolorosas y humillantes concesiones, en particular cuando se votaron en el Parlamento los "planes de salvataje" de Grecia.

El gobierno alemán —que funciona como el comité ejecutivo de las industrias exportadoras— estará dispuesto a sacrificarse para salvar el euro. Pero el consenso que reinaba a favor de la integración europea se fisuró. El euro-escepticismo surgió repentinamente. Un nuevo partido, Alternativa para Alemania (AfD), amenaza a la derecha de la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Para oponerse, los partidos centristas, socialdemócratas incluidos, deben rechazar cualquier concesión que otro país pudiera presentarle. Hasta ahora las transferencias de fondos internos dentro de la Unión Europea y de la eurozona estaban a menudo disimuladas en fondos regionales o sociales europeos. Pero la unión monetaria requerirá —no sólo para "salvar" a Grecia, sino también y sobre todo para el pos "salvataje"— sumas considerables, imposibles por tanto de disimular.

Varias demandas presentadas ante la Corte Constitucional intentaron politizar Europa y alertar a la opinión pública alemana. Durante un cierto tiempo el gobierno de Angela Merkel pareció aprobar la inventiva con la que el BCE esquivaba la prohibición de efectuar préstamos directos a Estados miembros, al tiempo que el Bundesbank lanzaba gritos de indignación. Pero como el conflicto de distribución entre los países de la zona euro será pronto un problema crónico, el costo político y económico de la unión monetaria llegará a ser posiblemente tan exorbitante que el gobierno ya no podrá ocultarlo ni defenderlo, sobre todo en un con-

texto en que la población alemana se halla expuesta a dura prueba por la austeridad presupuestaria.

A pesar de que Alemania sacraliza al euro, en principio podría prescindir de él. Para equilibrar los resultados económicos, quizás sería mejor devolver una cierta soberanía monetaria a los países europeos y un mayor margen de maniobra al Sur (y al Sudeste, que

Por una ironía de la historia, la unión monetaria que debía consolidar definitivamente la unidad europea amenaza ahora con dinamitarla.

espera entrar en la zona) en lugar de permanecer en el marco de la moneda única. Las dudas sobre la viabilidad de este régimen comienzan a crecer, incluso en Alemania. Después de todo, suponiendo que los alemanes tengan razón de pensar que, en ciertas circunstancias, la austeridad es buena para la salud económica, no debe olvidarse que en la práctica, sólo hizo milagros cuando fue de la mano de una devaluación de la moneda nacional (8).

La cohesión de la zona euro sólo se sostiene por el miedo a las consecuencias que podría producir su implosión. Pero dentro de poco, ese miedo posiblemente ya no alcanzará para convencer a los electores alemanes de continuar garantizando la supervivencia de la unión monetaria. Frente al auge de los nacionalismos, las elites políticas podrían considerar preferible dejar de identificar el euro a Europa, y escuchar a los economistas, cada vez más numerosos, incluso en Alemania (9), que postulan un régimen monetario más flexible y menos unitario, cercano al sistema monetario europeo vigente en los años 80 (10). Esa solución sin dudas no será la panacea, pero no es posible hallar una solución ideal en una economía capitalista cargada de múltiples contradicciones internas. Las exportaciones alemanas posiblemente sufrirán durante un tiempo, pero la suerte de los contribuyentes y la reputación de su país frente a sus vecinos podría verse mejorada.

Angela Merkel supo cambiar radicalmente de posición sobre la energía nuclear. No debe excluirse que quede en la historia como la canciller que liberó a Europa de la moneda única, convertida en pesadilla común. ■

1. Programa de compra por el BCE de obligaciones públicas y privadas por un monto de 60.000 millones de euros por mes adoptado en enero de 2015 para contener el riesgo de deflación. En otras palabras, el BCE emite moneda.

2. Véase Charles B. Blankart, "Oil and Vinegar: A Positive Fiscal Theory of the Euro Crisis", *Kyklos*, Vol. 66, No. 3, Zurich, 2013; Peter Hall, "The Economics and Politics of the Euro Crisis", *German Politics*, Vol. 21, No. 4, Chemnitz, 2012.

3. Como muestra Thomas Piketty en *El capital en el siglo XXI*, FCE, Buenos Aires, 2014. Las ventajas acumuladas, o "efecto Matthieu", implican el enriquecimiento de los ricos y el empobrecimiento de los pobres.

4. Wolfgang Streeck y Lea Elsässer, "Monetary Disunion: The Domestic Politics of Euroland", *MPiFG Discussion Paper 14-17*, Max Planck Institute for the Study of Societies, Colonia, 2014, www.mpifg.de

5. Según estimaciones basadas en la experiencia de Italia y de Alemania, las transferencias de fondos necesarias para impedir que se profundicen las diferencias de ingreso en la zona euro, superarán en mucho la capacidad de pago de Alemania, Francia y Holanda reunidas. Véase Wolfgang Streeck y Lea Elsässer, *op. cit.*

6. Este podría ser un viejo reflejo contraído por los alemanes en el período de posguerra: la tendencia a confundir su identidad colectiva con su moneda, lo que Jürgen Habermas llamó "D-Mark Patriotismus" ("el patriotismo del Deutschmark").

7. Intervención en el Bundestag, 7-9-11.

8. Mark Blyth, *Austerity: The History of a Dangerous Idea*, Oxford University Press, 2013.

9. Véase Heiner Flassbeck y Costas Lapavistas, *Against the Troika. Crisis and Austerity in the Eurozone*, Verso, Londres y Nueva York, 2015.

10. Véase Frédéric Lordon, "Sortir de l'euro?", *Le Monde diplomatique*, París, agosto de 2013.

*Director emérito del Instituto Max Planck para el Estudio de las Sociedades, Colonia; autor de *Du temps acheté. La crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique*, Gallimard, París, 2015.

Traducción: Carlos Alberto Zito

En los últimos 50 años el flujo de migrantes alrededor del planeta se ha triplicado. Paradójicamente, de la mano de la eliminación de las barreras al comercio, la inmigración ha ido adquiriendo el carácter de una amenaza global, que justifica el crecimiento de los dispositivos securitarios para combatirla, aun cuando éstos demuestren no ser exitosos.

Frente a la crisis migratoria global

El negocio de la desesperación

por Claire Rodier*

Los últimos veinte años del pasado siglo y los que van del presente han sido testigos de la progresiva conversión de la inmigración en un tema polémico que rara vez abandona la primera línea de actualidad. Es cierto que, desde la década de 1960, el número de migraciones se ha triplicado a lo largo y ancho del planeta. Pero esta evolución cuantitativa podría considerarse como fruto del orden establecido: después de todo, la mayoría de las recientes oleadas de desplazamientos de poblaciones han sido y continúan siendo previsibles para todo aquel que sepa observar la marcha del mundo.

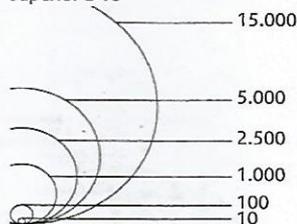
Cuando la coalición internacional tomó la decisión de derrocar al régimen de Muamar Gadafi en marzo de 2011, ¿acaso no podía imaginar que una de las primeras consecuencias de su intervención militar sería la de provocar el éxodo de un gran número de extranjeros que se encontraban en Libia en ese momento? Este número ha sido estimado en un millón y medio. Por el contrario, todo ha tenido lugar como si se tratase de fenómenos si no inexplicables, al menos imposibles de prever. Y por si fuera poco, existe por parte de aquellos que se encuentran a cargo de la "gestión de los flujos migratorios" una sorprendente tendencia a presentarlos como una amenaza, así como a promover reiteradamente la instauración de energías medidas para controlarlos, sin dar nunca la impresión de conseguirlo.

Cada época posee su propia forma de negar la evidencia y de repetir la misma cantinela. En Francia, a finales de los 70, los "trabajadores inmigrantes", a los que durante las décadas precedentes se había hecho venir en gran número, fueron acusados de ocupar los empleos de los nativos en una situación de incremento del desempleo. Pese a ello, se quedaron. Posteriormente, tras haberlos desplazado deliberadamente junto con sus familias hacia guetos en las periferias de los grandes centros urbanos, nos asombramos de que sus hijos -las "segundas generaciones", y más tarde las terceras- no aceptasen permanecer en los guetos. Paradójicamente, estos jóvenes han visto cómo se les reprocha el no querer "integrarse", cuando previamente se había hecho todo lo posible para marginarlos.

De forma paralela, los grandes conflictos internacionales causados por las independencias, y más tarde el hundimiento del bloque soviético, han forzado el desplazamiento de centenares de miles de personas hacia todas partes del mundo, y en particular hacia los países occidentales. En lugar de considerar estos movimientos como la consecuencia lógica de un siglo de desorden y de dominación, y por tanto establecer políticas *ad hoc* para enfrentarse a

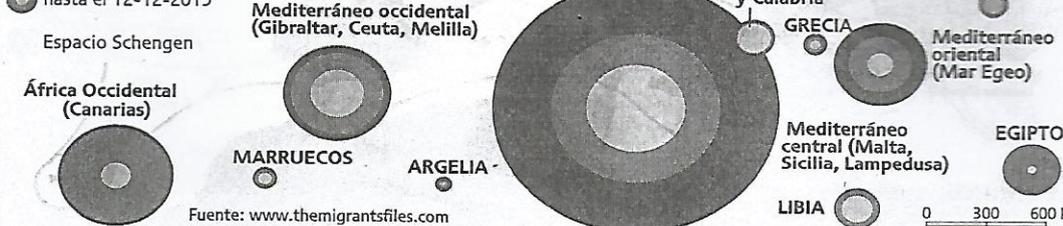
Viajes mortales

Número de migrantes muertos o desaparecidos superior a 10



Desde enero de 2001...

- hasta fines de 2005
- hasta fines de 2010
- hasta el 12-12-2015



Fuente: www.themigrantsfiles.com

Cécile Marin

esta nueva situación, políticas basadas por ejemplo en un reparto equitativo de los recursos del planeta, los gobiernos de estos países se han dedicado a levantar barreras para protegerse de los "invasores". En realidad, estas barreras, sean reglamentarias (visados), físicas (muros, verjas...) o virtuales (radares y otros sistemas de detección) están lejos de ser infranqueables: una proporción no desdeñable de inmigrantes calificados como indeseables consiguen superarla una y otra vez.

Esto se debe a varias razones. En primer lugar, es difícil concebir un bloqueo de fronteras completamente hermético para los "clandestinos" sin arriesgarse a comprometer la libre circulación de todo aquello de lo que se nutre la globalización. Igualmente, no está claro que, pese a los discursos dominantes, el fin perseguido sea mantener a todos los inmigrantes fuera de las fronteras: es sabido que las economías de los países industrializados no pueden privarse de una fuente de mano de obra flexible y explotable, y los sin papeles responden a esta necesidad. Por último, la movilidad, aunque reducida, sigue siendo una válvula de regulación, una forma de ajuste necesario en las crisis que la comunidad internacional no sabe resolver, como ciertos conflictos o catástrofes medioambientales. Y sin embargo, en un mundo ca-

da vez más propenso al desplazamiento, no pasa ni una sola semana en la que en alguna parte no se invente un nuevo dispositivo de control migratorio. ¿Por qué?

Indeseables

Apéndices paradójicos de la globalización, los controles migratorios revelan dos contradicciones. La primera reside en el hecho de que su intensificación se desarrolla paralelamente al crecimiento de la movilidad internacional. A partir del último tercio del siglo XX, la expansión de los intercambios económicos, la democratización de los transportes aéreos y los fulgurantes progresos técnicos de los medios de comunicación han pulverizado las distancias y han hecho desaparecer en gran medida determinados atributos de las fronteras, como las barreras aduaneras. De hecho, varias regiones del mundo se han organizado para formalizar esta desaparición: es el caso de la Unión Europea, del TLCNA (que agrupa a Canadá, Estados Unidos y México) y también del Mercosur en Suramérica. Al mismo tiempo, los controles migratorios no han cesado de desarrollarse. La creación de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), la progresión del muro que separa Estados Unidos de México, el despliegue de patrullas marítimas en el Mediterrá-

neo para interceptar a los *boat people* procedentes del Norte de África, así como el uso de técnicas de escaneo y de biometría como medio de verificación de pasaportes en los aeropuertos, son ejemplos de la importancia concedida por los Estados a la vigilancia de los límites de su territorio.

La creación simultánea en la Europa de los años 80 de un espacio de libre circulación, por un lado, y del mecanismo Schengen, por otro, es representativa de estas tendencias antagónicas. El primero, instaurado en 1986, pretende facilitar la circulación de bienes, capitales, mercancías y personas entre los países miembros de lo que entonces aún era la Comunidad Europea, mediante la supresión de los controles en sus fronteras internas. El segundo, cuya elaboración tuvo lugar entre la firma del acuerdo de Schengen en 1985 y la de la convención del mismo nombre en 1990, se concibe con el fin de organizar la respuesta policial al "déficit de seguridad" producto de la mencionada supresión. Especialmente, es preciso evitar que beneficie a aquellas personas procedentes de un país no perteneciente al "club Schengen", es decir, actualmente la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea.

Lejos de limitarse a proteger las fronteras exteriores de una Europa convertida en un santuario, el mecanismo Schengen,

Nuevas rutas y nuevos obstáculos

- Espacio Schengen, con países asociados a la Unión Europea, en teoría zona de libre circulación
- Otros países de la Unión Europea
- Países candidatos al Espacio Schengen
- Principales países de tránsito de los migrantes
- Países o regiones en conflicto

Grandes rutas migratorias

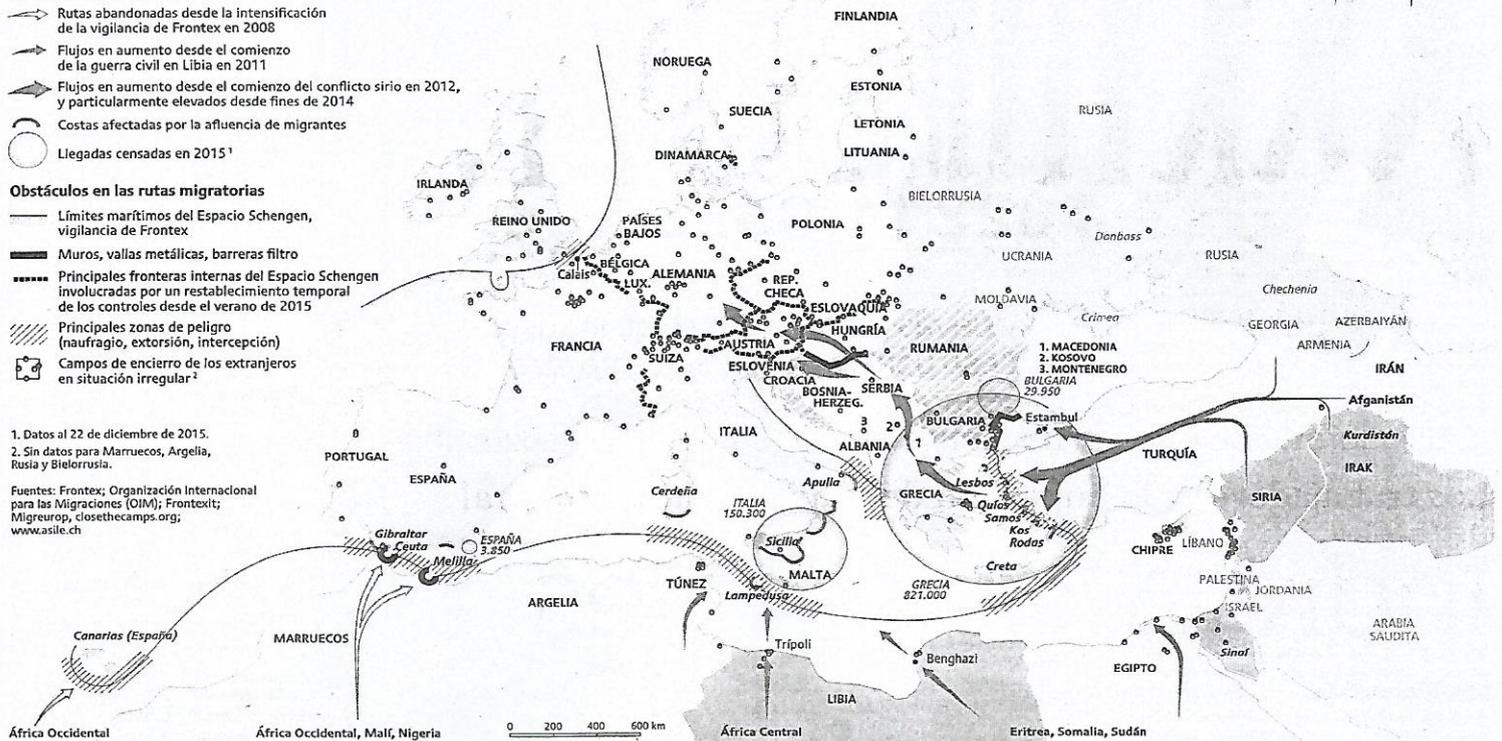
- Rutas abandonadas desde la intensificación de la vigilancia de Frontex en 2008
- Flujos en aumento desde el comienzo de la guerra civil en Libia en 2011
- Flujos en aumento desde el comienzo del conflicto sirio en 2012, y particularmente elevados desde fines de 2014
- Costas afectadas por la afluencia de migrantes
- Llegadas censadas en 2015¹

Obstáculos en las rutas migratorias

- Límites marítimos del Espacio Schengen, vigilancia de Frontex
- Muros, vallas metálicas, barreras filtro
- Principales fronteras internas del Espacio Schengen involucradas por un restablecimiento temporal de los controles desde el verano de 2015
- Principales zonas de peligro (naufragio, extorsión, intercepción)
- Campos de encierro de los extranjeros en situación irregular²

1. Datos al 22 de diciembre de 2015.
2. Sin datos para Marruecos, Argelia, Rusia y Bielorrusia.

Fuentes: Frontex; Organización Internacional para las Migraciones (OIM); Frontexit; Migreurop; closethecamp.org; www.asile.ch



Cécile Marin

junto con otros dispositivos asociados, como por ejemplo el fichero Eurodac, implanta un sistema de filtro virtual que permite llevar a cabo una selección entre aquellos que pueden circular en su interior y aquellos que no, designados como indeseables. Y no se limita a lo virtual: una reforma del acuerdo Schengen presentada en 2011 apunta a posibilitar el restablecimiento de controles en las fronteras físicas de los Estados miembros en caso de urgencia migratoria.

Más y más controles

La segunda contradicción, esta vez intrínseca, de los controles migratorios, es su propia tendencia a multiplicarse. Su innegable desarrollo está cuajado de declaraciones políticas o policiales que insisten en la necesidad de proteger las fronteras contra la inmigración irregular, como corolario de la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de seres humanos. Para lograr este objetivo, parece que sea preciso implantar cada vez más controles, debido a una presión migratoria creciente, o inminente, o masiva, según el caso y el discurso. Así, las autoridades israelíes construyen un muro que separa su país de Egipto para evitar que las "fronteras sean utilizadas para inundar el país de trabajadores ilegales"; Grecia obtuvo en 2010 la autorización por parte de sus socios de la UE para intervenir de urgencia en ayuda de las brigadas de guardias fronterizos especializados, con el fin de hacer frente a la "afluencia masiva" de inmigrantes a su frontera con Turquía, y la Comisión Europea decidió en febrero de 2011 enviar patrullas de la agencia Frontex a la zona mediterránea afectada, porque temía que la relajación de la vigilancia de las playas tunecinas debida a la

Revolución de los Jazmines provocase un éxodo de tunecinos hacia Europa.

Se podría pensar que estas iniciativas se basan en la búsqueda de la eficacia. Pues bien, al revisar la acumulación de medidas tomadas a lo largo de los años, puede comprobarse que ha sucedido todo lo contrario, como si en lugar de aportar la seguridad prometida, cada nuevo dispositivo de control puesto en marcha no tuviera otra utilidad que poner de manifiesto las fallas y las lagunas de los precedentes, ni otro objetivo que justificar los siguientes.

De hecho, y aunque el acceso a datos y cifras fiables no resulte fácil debido a la fuerte carga ideológica que poseen todas las cuestiones relacionadas con las migraciones, en realidad nada permite pensar que los esfuerzos desplegados por los países ricos para impedir o canalizar la movilidad de las personas en busca de una vida mejor o de protección estén teniendo éxito. O más bien: aun suponiendo que lo tengan parcialmente –lo que probablemente ocurra en el plano cuantitativo, aunque sólo sea por el número de personas que mueren durante el recorrido de migración–, este factor resulta indiferente en vista del proceso. Es como si, soslayando la importancia de la eficacia de los dispositivos de vigilancia de las fronteras existentes, la necesidad de implantar otros nuevos se impusiese con claridad. Los informes anuales de la citada agencia Frontex rebosan de cifras, cada una más indemostrable que la anterior. Dan cuenta, y se felicitan por ello, del número de arrestos de "inmigrantes ilegales" llevados a cabo en tal o cual puesto fronterizo, de las negativas de entrada a personas desprovistas de los documentos necesarios para franquear las fronteras europeas, de las intercepciones marítimas que han da-

do lugar a tantas denuncias, de los desmantelamientos de redes de traficantes, etc.

Pero no se encuentra el más mínimo rastro, o a lo sumo sólo en los balances elaborados por las instituciones europeas de las que depende la agencia y que la financian, de un análisis global de su impacto en términos de costos y beneficios. Incluso sin entrar a considerar el costo humano de sus intervenciones, sería interesante conocer el número de nuevas rutas migratorias que se abren cada vez que se cierra un punto de paso. Se trata por tanto de una realidad que relativiza el alcance de los resultados ofrecidos. La autosatisfacción anunciada pa-

rece ante todo destinada a justificar el aumento de los medios humanos y materiales puestos a disposición de Frontex, con el fin de luchar en mejores condiciones contra la inmigración irregular. Durante sus cinco primeros años de existencia, esta agencia vio cómo su presupuesto, que constaba de 6,3 millones de euros en 2005, se multiplicó por quince. ■

*Jurista del Grupo de Información y Apoyo a los Inmigrantes (GISTI) y fundadora de la red euro-africana Migreurop. Este texto ha sido extraído de su libro *El negocio de la desesperación. ¿Qué oculta la tragedia de los refugiados?*, Capital intelectual - Le Monde diplomatique, Buenos Aires, 2015.
© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur



Maestría en Estudios Sociales Agrarios

CATEGORÍA "A" DE LA CONEAU (RES.856/11).

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
Ciclo académico 2016-2017

30
AÑOS

Más Información en: agrarias@flacso.org.ar / www.flacso.org.ar

Dossier

El fracaso
de Europa

Londres, 24-6-16 (Stefan Wermuth / Reuters)

El Reino Unido, bajo gobiernos de signos políticos aparentemente distintos, siempre ha sido capaz de hacer prevalecer sus intereses en el seno de la Unión Europea y de ir modelándola según la matriz del neoliberalismo y de la desregulación financiera que adoptó con fervor desde los tiempos de Margaret Thatcher.

Gran Bretaña forjó una UE a su imagen y semejanza

Europa al servicio de Su Majestad

por Bernard Cassen*

"Todo el gran mercado y nada más que el gran mercado"

Aun cuando no se reduzcan a ello, los debates políticos suelen presentarse como batallas de números. La campaña del referéndum del 23 de junio sobre la permanencia (*remain*) del Reino Unido en la Unión Europea (UE) o su abandono (*leave*), que tuvo como resultado el triunfo del "Brexit", lo demostró una vez más. Cada sector había movilizad a especialistas, lobbistas e instituciones de todo tipo para producir montones de estudios prospectivos –evidentemente contradictorios– sobre las ventajas o los peligros, en particular económicos y financieros, del "Brexit" para el reino. Contrariamente, el ciudadano británico fue poco o nada informado sobre la manera en que su país diseñó las prácticas y las políticas comunitarias de la Unión. Aquellos que, tanto

en Bruselas como en la mayoría de las capitales europeas, se alegran de esta influencia evitan gritarlo a los cuatro vientos. Aquellos que la aceptan con dificultad, especialmente en Francia, no quieren mostrar públicamente su incapacidad para contenerla.

A excepción de Francia, involucrada militarmente en numerosos escenarios de operaciones exteriores, los Estados miembros de la Unión limitaron en gran medida sus ambiciones estratégicas internacionales al horizonte europeo y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) (1). Se expresan desde el interior de la UE, incluso de la eurozona, habiendo incorporado sus exigencias y sus presuntos logros, y no razonan en términos de un mano a mano o un enfrentamiento con "Europa". Grecia, sometida a las imposiciones de sus socios y amenazada con una expulsión de la moneda única, parece ser la excepción que confirma la regla.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, las élites políticas británicas adoptaron una postura

totalmente diferente. En un discurso del 5 de diciembre de 1962, Dean Acheson, secretario de Estado del presidente estadounidense Harry Truman entre 1949 y 1953, había fustigado esta postura en términos retomados constantemente luego e, incluso de manera muy reciente, en las polémicas sobre el "Brexit": "Gran Bretaña perdió un imperio y aún no encontró su papel. El intento de desempeñar el papel de potencia autónoma –es decir, un papel basado en una 'relación especial' con Estados Unidos, un papel basado en su lugar a la cabeza de un Commonwealth que no tiene ninguna estructura o unidad o poder–, ese papel llegó a su fin".

En ese entonces, estos dichos generaron un escándalo en el *establishment* británico, más aun cuando ridiculizaban los términos de dos discursos, también históricos, pronunciados por Winston Churchill unos quince años antes. En el primero, el 5 de marzo de 1946 en Zurich, el primer ministro preconizaba la creación de una Europa federal a la

cual el Reino Unido brindaría un generoso apoyo, pero desde el exterior: "Estamos con ustedes, pero no somos parte de ustedes". En el segundo, en 1948, ante el Congreso del Partido Conservador, desarrollaba su teoría de los "tres círculos" en cuya intersección se encontraba, según él, el Reino Unido: primero los países de lengua inglesa -a saber también Estados Unidos y los dominios "blancos" (Canadá, Australia y Nueva Zelanda)-; luego Europa, y finalmente el Commonwealth (2). La pertenencia exclusiva a uno de ellos, incluso al más cercano, Europa, estaba fuera de discusión.

En su casa y en la ajena

Una expresión reapareció con frecuencia estos últimos tiempos en los medios de comunicación para caracterizar las relaciones entre Londres y la Unión: "semi-detached", palabra que evoca las casas con medianera de los suburbios británicos. La Unión no constituye una sola casa, sino dos: una que posee 28 habitaciones -entre ellas, la del Reino Unido- y otra con una sola habitación, la del Reino Unido. Según las circunstancias, Albión vive en una u otra de estas residencias. Las concesiones obtenidas por el primer ministro David Cameron en el Consejo Europeo del 18 y 19 de febrero de 2016 lo confirman (3).

La reivindicación de una "relación especial" con Estados Unidos resulta menos fácil. Esta ilusión, alimentada durante mucho tiempo, se actualizó en 2013 en ocasión de las revelaciones de Edward Snowden sobre la red planetaria de vigilancia tejida por la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA). Lo que nadie ignoraba en la comunidad de los servicios de inteligencia quedó espectacularmente expuesto en la plaza pública: las "grandes orejas" que escuchan todos los mensajes del planeta por cuenta de Estados Unidos no son sólo estadounidenses, sino también australianas, británicas, canadienses y neozelandesas. En efecto, los estrategas de Washington sólo depositan su total confianza en sus subcontratistas con quienes comparten la lengua inglesa.

Este club de los "cinco ojos" ("Five Eyes") se había formalizado después de la Segunda Guerra Mundial mediante tratados secretos, comenzando por el United Kingdom-United States Communications Intelligence Agreement (UKUSA), firmado en 1946. De ahí a imaginar que esta "anglosfera" constituye un polo de poder al margen de la Unión, desde el cual Londres podría proyectarse internacionalmente, hay un abismo que Barack Obama, ni sus predecesores, pensó jamás en cruzar. El 22 de abril de 2016, durante su visita a Londres, el presidente estadounidense recordó firmemente a sus anfitriones que la permanencia del Reino Unido en la UE era también un asunto de interés nacional -lo único que cuenta para Estados Unidos. Aun cuando la "anglosfera" siga teniendo una resonancia sentimental y cultural muy fuerte en Canadá, Australia y Nueva Zelanda, no podría constituir una prioridad para sus gobiernos, aunque más no sea por razones geopolíticas: Ottawa debe primero manejar su relación con su gran vecino del Sur, y Canberra y Auckland, encontrar su lugar en la zona Asia-Pacífico.

Estas fuerzas centrífugas dan cuenta de la dificultad de constituir una comunidad política con el vínculo lingüístico como único cimiento. Pero los devotos de la "anglosfera", que deploran su desintegración, todavía no se dieron cuenta de que ya ganaron una enorme victoria. Ya existe una "anglosfera" bis, y en plena expansión: la Unión Europea (4). En términos estrictamente lingüísticos, la Unión es cada vez más inglesa. Se lo observa en la mayoría de los ámbitos científicos y téc-

nicos, en la administración de las empresas, en la enseñanza superior, en las actividades relacionadas con la comunicación y el comercio, etc., donde el inglés reemplaza a las lenguas nacionales.

En el seno de las instituciones europeas -que deberían dar el ejemplo-, la Comisión, aunque estatutariamente guardiana de los tratados y del resto del "acervo comunitario", ignora abiertamente el reglamento lingüístico de 1958, que otorga a los idiomas nacionales (actualmente, 24) de los Estados miembros el estatuto de idiomas oficiales e idiomas de trabajo de la Unión. De hecho, privilegia excesivamente el inglés, al igual que el Servicio Europeo de Acción Exterior e incluso las instancias del Consejo Europeo (5).

Sometimiento vergonzoso

La servidumbre voluntaria llegó a su punto máximo cuando Pierre Moscovici, comisario europeo de nacionalidad francesa, envió una carta oficial en inglés a Michel Sapin, ministro de Finanzas de François Hollande. Esta pesada tendencia comunitaria tiene consecuencias económicas: menospreciando la "competencia libre y sin distorsiones", favorece a las empresas de los países anglófonos (Irlanda y Reino Unido), que, en cambio, no deben pagar los considerables gastos de traducción de las respuestas, a menudo voluminosas, a los llamados a licitación de la Comisión (6).

Otro motivo de satisfacción para Londres: la Unión no sólo es inglesa en sus prácticas lingüísticas; lo es también en su filosofía y sus políticas, y ello, desde su origen. En efecto, el Tratado de Roma que dio origen a la Comunidad Económica Europea (CEE), en 1957, ubica los dogmas liberales de la competencia y el libre comercio en la cima del edificio comunitario. Los tratados ulteriores, y en particular el Acta Única (1986), no hicieron más que confirmarlo. No habiendo sido signatarios del tratado fundacional, en aplicación de la doctrina Churchill, los dirigentes británicos evaluaron luego sus potencialidades y trataron de corregir su error. Tras dos intentos bloqueados por el general De Gaulle, el Reino Unido ingresó finalmente en la CEE en 1973. Este cálculo pragmático de los costos y beneficios de la adhesión estaba en las antipodas de la mística europeísta de los dirigentes de la socialdemocracia y la democracia cristiana del continente.

Fue Margaret Thatcher, primera ministra de 1979 a 1990, quien formuló con mayor claridad el objetivo perseguido por el Reino Unido: "Todo el gran mercado y nada más que el gran mercado". De ahí una línea política constante, cualquiera sea el color de los gobiernos de Londres: eliminar las trabas a las fuerzas del mercado, de manera unilateral de ser necesario, exigiendo derogaciones de leyes comunitarias, en particular en materia social; multiplicar los obstáculos a toda forma de unión política o monetaria; reivindicar, sin vacilaciones, la obtención del máximo de consecuencias económicas de la pertenencia a la Unión. Uno de los logros -compartido con Alemania- de esta estrategia fue la ampliación, en 2004 y luego en 2007, a los Estados de Europa Central y Oriental, que aumentó significativamente las posibilidades del dumping social intracomunitario, en particular, a través de la utilización de "trabajadores desplazados" (7). Un gran talento, como se observa, pero cuyos resultados no son reivindicados sino en voz baja por la diplomacia británica con el fin de obtener siempre más de sus socios...

Copamiento de puestos clave

Londres encontró un compañero de ruta inesperado: la Comisión Europea. Desde luego, el Ejecutivo Bruselense, que se ve como el gobierno de una hi-

potética Europa federal, se muestra radicalmente hostil a la Europa de los Estados preconizada por la mayoría de los dirigentes británicos. En cambio, ve en ellos valiosos aliados para generar liberalismo de manera continua. Esta connivencia se traduce en la presencia de británicos en puestos estratégicos para sus intereses en el seno de las instituciones de la Unión. Así, uno de ellos preside desde hace más de diez años la Comisión de Mercado Interno del Parlamento Europeo.

Más significativa aun fue la decisión de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión, de nombrar comisario de Servicios Financieros a Jo-

nathan Hill, conocido sobre todo como agente de influencia de la City y vocero del lobby bancario. No es el único comisario en situación de conflicto de intereses, pero ciertamente el más emblemático, al igual que Juncker, ex primer ministro de Luxemburgo, quien, tal como lo demostraron los LuxLeaks, otorgó beneficios fiscales a varias

multinacionales, tales como Apple o Amazon (8). Para Dean Acheson, hace más de medio siglo, el Reino Unido estaba en busca de su papel. Si se expresara hoy, podría pensar en el de pasajero clandestino de la construcción europea (9). Un pasajero que obtiene un triunfo modesto y deja a otros la tarea de recordar sus proezas. Y nadie está más calificado para un ejercicio semejante que Peter Sutherland, verdadero oligarca de la mundialización liberal (10). En efecto, sabe de qué habla cuando escribe: "Una de las ironías más lamentables respecto del 'Brexit' es que Londres logró un éxito tan grande construyendo una Unión Europea librecambista a su imagen y semejanza" (11). ■

"Estamos con ustedes, pero no somos parte de ustedes", decía W. Churchill.

1. Entre los miembros de la Unión Europea, sólo los cuatro países neutrales (Irlanda, Suecia, Finlandia y Austria) no son miembros de la OTAN.
2. Véase Bernard Cassen, "Cameron en su trampa", *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, febrero de 2016.
3. Véase "Et si David Cameron avait ouvert la voie à une 'autre Europe'?", *Mémoire des luttes*, 1-3-16, www.medelu.org
4. Véase Benoît Duteurtre, "La langue de l'Europe", *Le Monde diplomatique*, París, junio de 2016.
5. Véase "Pour une ambition francophone", informe N° 1723 presentado por Pouria Amirshahi, Comisión de Relaciones Exteriores, Asamblea Nacional, París, enero de 2014.
6. Véase Dominique Hoppe, "Los costos del monolingüismo", *Le Monde diplomatique*, edición Cono Sur, Buenos Aires, abril de 2015.
7. Véase Gilles Balbastre, "Travail détaché, travailleurs enchaînés", *Le Monde diplomatique*, París, abril de 2014.
8. Véase Eva Joly y Guillemette Faure, *Le Loup dans la bergerie*, Les Arènes, París, 2016.
9. Utilizada en ciencias sociales para designar al beneficiario de una acción colectiva a la cual no contribuye, esta noción fue elaborada por el economista estadounidense Mancur Olson, *Logique de l'action collective*, Presses universitaires de France, París, 1978 (1ª ed.: 1965).
10. Ex miembro de la Comisión Trilateral, ex comisario europeo, ex director general del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT), ex presidente de Goldman Sachs y de British Petroleum, etc.
11. Peter Sutherland, "A year of magical thinking for the Brexiters?", *Financial Times*, Londres, 31-3-16.

Dossier

El fracaso
de Europa



Atenas, 15-6-16 (Yannis Behrakis / Reuters)

Contra la pared, Atenas capituló ante las exigencias de sus “socios” en julio de 2015. Sus decisiones presupuestarias y fiscales se encuentran sometidas a aprobación previa. Y el programa de privatizaciones que se le impuso constituye la mayor transferencia de bienes públicos para un país de la Unión Europea.

El remate de Grecia

La gran estafa de las privatizaciones

por Niels Kadritzke*

Un estudio del Transnational Institute (TNI) sobre la “industria de la privatización en Europa”, publicado en febrero de 2016, llega a la conclusión de que “no existe ninguna prueba que demuestre que las empresas privatizadas ofrecen un servicio más eficaz”. Al contrario, la ola de privatizaciones provocó la caída de los salarios, deterioró las condiciones de trabajo y aumentó las desigualdades en los ingresos (1).

En este aspecto, Grecia constituye un caso de manual. Durante la crisis provocada por su endeudamiento, el país se vio obligado por sus acreedores a vender al mejor postor la mayor cantidad posible de sus empresas estatales o semiestatales, con el único objetivo de honrar sus deudas. Este remate de los bienes de la comunidad es uno de los aspectos más absurdos de los “planes de rescate” impuestos desde el 2010 por la “Troika” (2), que llevaron a la economía griega a una interminable recesión. Exigir que

un Estado en crisis privatice sus empresas, implica necesariamente obligarlo a liquidarlas, observan los autores del estudio. La privatización reúne todos los rasgos de una apropiación fraudulenta.

Esta constatación se impone independientemente de la idea que se tenga de las ventajas o los inconvenientes de un sector público. En Grecia, éste sufría innegables dificultades, que los defensores de la privatización utilizaron como argumentos. Algunas empresas del Estado no brindaban ningún bien o servicio indispensable a la población (como la electricidad o el transporte público), sino que tenían por vocación esencial otorgar a los partidarios del gobierno de turno empleos bien remunerados, protegidos y poco demandantes, a costa del cliente y de los contribuyentes. Esto explica por qué su puesta en venta no suscitó sólo rechazos.

Trampas

Para evaluar, desde un punto de vista liberal, los fundamentos de una privatización, los dirigentes

deben responder a tres preguntas: ¿el precio es proporcional a los ingresos de los que el Estado se priva al vender un bien?, ¿de qué garantías disponen respecto a las inversiones que la operación debería generar?, ¿qué margen de acción conserva el Estado sobre las empresas privatizadas en los ámbitos estratégicamente vitales para los intereses del país?

Estas preguntas resultan de particular importancia en el caso de los dos proyectos de privatización más grandes del país: la venta del 67% de las acciones de la sociedad del Puerto del Pireo (OLP) al grupo chino Chinese Ocean Shipping Company (COSCO) (3) y la concesión de catorce aeropuertos a un consorcio privado liderado por el grupo alemán Fraport.

La adquisición del Pireo por parte de COSCO, empresa del Estado chino, se desarrolló de acuerdo a un procedimiento que caracteriza a casi todos los remates de las “joyas de la abuela” griegas: la licitación estaba dirigida a un solo candidato. El

negocio se cerró en provecho de una potencia monopólica que podía imponer al vendedor no sólo el precio de la transacción, sino también toda una serie de condiciones. Esta operación confiere a los chinos un control absoluto sobre el mayor puerto de Grecia, ya que una filial de COSCO ya administra, desde el 2008, dos de las tres terminales de contenedores del Pireo, gracias a una conveniente concesión de treinta y cinco años.

Para adquirir los dos tercios de las acciones del OLP, COSCO desembolsó 368,5 millones de euros. Esta tarifa se negoció en total opacidad. El fondo de puesta en valor del patrimonio del Estado griego (TAIPED), que supervisa las privatizaciones, había juzgado insuficiente la primera oferta del grupo chino; pero el monto suplementario concedido por este último sigue siendo tan secreto como el "precio justo" establecido por las sociedades de peritaje. El TAIPED se limitó a estimar el valor total de la transacción en 1.500 millones de euros, cifra alcanzada por medio de un cálculo acrobático que consistió en sumar al precio de venta los ingresos fiscales que podría generar en el futuro y las inversiones de 350 millones de euros prometidas por el comprador.

Este cálculo encierra una doble trampa. Antes de la operación de venta, la filial de COSCO que reina en las dos terminales de contenedores, le transfería al OLP un derecho de concesión de 35 millones de euros por año. Sin embargo, dos tercios de esta suma serán ahora asignados al propietario mayoritario del OLP; en otras palabras, el dinero pasa del bolsillo izquierdo de COSCO a su bolsillo derecho. El Estado griego se priva, de esta manera, de percibir los alquileres que le quedaban por cobrar hasta el término de la concesión de las terminales, una suma que equivale a unos 700 millones de euros, que sería lógico, en consecuencia, descontar del valor total de la privatización del Pireo.

La cuenta del TAIPED esconde otro error, aun más absurdo: toma en cuenta los 115 millones de euros de subvenciones acordadas por la Unión Europea a un proyecto de ampliación de la terminal de cruceros, una suma cuyo pago de ninguna manera estaba condicionado a la privatización del puerto. Por otra parte, nada garantiza que COSCO realizará las inversiones prometidas, ya que el acta de venta contiene una cláusula que prohíbe durante cinco años toda sanción en su contra en caso de incumplimiento de sus compromisos (4).

Curiosidades

Hay otra operación de privatización que despierta numerosos interrogantes. De común acuerdo con el oligarca griego Dimitris Copelouzos (5), la sociedad alemana Fraport acaba de adquirir por cuarenta años –con opción por cincuenta– los derechos de explotación y de ampliación de catorce aeropuertos. A los 123.000 millones de euros depositados con la firma del contrato se agregará anualmente el monto correspondiente a los derechos de concesión e impuestos valuado en un total de 8.000 millones de euros a cuarenta años.

Los detractores de esta venta proponen otro cálculo. Los catorce aeropuertos dejan actualmente un beneficio anual de 150 millones de euros, es decir, 6.000 millones por el período total de la concesión. Pero se espera que estos ingresos aumenten considerablemente, así lo estima también Fraport, que apuesta al potencial de crecimiento de los vuelos comerciales en dirección a las islas turísticas de Rodas, Kos, Mykonos, Santorini y Corfu –el tráfico aéreo que une al continente con estos preciados destinos aumentó un 20% por año en el transcurso de los últimos dos años–. El director financiero de Fraport, Matthias Zieschang, estima en 100 millones de euros anuales las ganancias suplementarias que su grupo debería acumular a partir de 2017 "únicamente gracias a los aeropuertos griegos" (6).

Al comienzo, tres candidatos se habían presentado a la licitación –una diversidad excepcional para una privatización en Grecia–. Sin embargo, ¿hay que creerle al patrón de Fraport, Stefan Schulte, cuando afirma que su grupo "venció a una fuerte competencia gracias a la calidad de su propuesta"?

En el procedimiento hubo al menos dos curiosidades que llaman la atención. Primero, la sorprendente decisión de ceder una red aeroportua-

ria que genera dinero. Hasta inicios del 2013, el Estado contemplaba otra manera de proceder: los treinta y siete aeropuertos del país estaban repartidos en dos lotes y cada uno contenía instalaciones que producían ganancias y otras que generaban pérdidas. De esta manera se buscaba que el comprador no se contentara sólo con embolsar las ganancias generadas por los destinos de moda, sino que invirtiera también en el desarrollo de los aeropuertos mal comunicados de las islas más alejadas. Este esquema equilibrado, concebido para evitar un incentivo demasiado impactante, chocó con el categórico rechazo de la "Troika", que insistió para que el "paquete" a privatizar incluyera sólo las piezas escogidas considerablemente lucrativas.

Es tentador suponer que la potencia más influyente en el seno de la "Troika", es decir, Alemania, no sea ajena a esta decisión. Y la sospecha se refuerza al descubrir otra rareza del caso: en el procedimiento de licitación, el TAIPED eligió como "consejero técnico" a Lufthansa Consulting, filial de la compañía aérea alemana que vela por los intereses de Fraport, ya que representa el 8,45% de sus acciones... En resumen, aparecen todos los ingredientes para un flagrante conflicto de intereses, lo cual violaría todas las reglas europeas en materia de licitaciones –por no hablar de la infracción a la decencia más elemental–.

Los autores del estudio del Transnational Institute llegan a la misma conclusión. Subrayan además otro detalle insólito: Fraport pertenece en su mayoría al Land de Hesse y a la ciudad de Fráncfort, que juntos detentan el 51,3% de sus acciones. La mayor parte de los beneficios acumulados gracias a la liquidación de los bienes públicos de Grecia vendrá entonces a alimentar las arcas de las colectividades locales en Alemania, país que, coincidentemente, es el principal acreedor de Atenas. Aunque se lo considere o no un desfalco disimulado, el resultado es el mismo: el Estado griego se ve privado de una fuente de ingresos a largo plazo que hubiera sido de mayor utilidad para la estabilización de sus finanzas que el producto inmediato de una privatización rebajada, que fue inmediatamente absorbido por las letras de cambio de su deuda.

Por su parte, Fraport está decidida a maximizar las ganancias de su artimaña mediterránea. Apuesta al aumento continuo de la cantidad de pasajeros, pero también a una "ampliación y optimización consecuentes de las zonas comerciales" para "generar rápidamente beneficios suplementarios", como confiesa con toda franqueza Zieschang.

El concesionario tuvo el cuidado de garantizar las condiciones óptimas para que la máquina de producir dinero funcione. Fraport está exonerada no sólo del pago de los impuestos inmobiliarios y locales, sino también de cualquier otro tipo de obligaciones de base. Puede, por ejemplo, anular de un solo trazo los contratos de alquiler y cualquier otro contrato suscrito por los antiguos prestatarios de los catorce aeropuertos, y redistribuir las licencias de explotación a otros socios de su elección sin pagar un solo centavo de indemnización a los comerciantes y proveedores despedidos: de esto se encargará el Estado griego. Y eso no es todo. Los poderes públicos también se comprometen a indemnizar a los empleados despedidos por Fraport, a hacerse cargo de las futuras víctimas de accidentes

de trabajo, incluso cuando la responsabilidad de la empresa sea evidente, y también a financiar las pericias medioambientales requeridas para los trabajos de ampliación de los aeropuertos. También está previsto que el Estado meta la mano en su bolsillo en caso de que algún desafortunado descubrimiento arqueológico retrase las obras (7).

Este uso ilimitado de los fondos públicos para cubrir cualquier gasto del concesionario no sólo revela un cinismo desenfrenado; también va en contra de los principios promulgados por la propia Unión Europea. "La privatización de empresas públicas contribuye a la reducción de las subvenciones, transferencias de fondos o garantías de Estado otorgadas a las empresas públicas", declaraba en octubre de 2012 la Comisión Europea a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que protestaban contra la privatización de plantas de tratamiento de agua.

En el caso de Fraport, las cosas son diferentes: el concesionario de los catorce aeropuertos goza de una reserva casi ilimitada de subvenciones, de transferencias de fondos y de garantías por parte de un Estado griego que tiene la soga al cuello. Este último no puede opinar sobre las decisiones que afectan a uno de los sectores clave de su economía nacional. Por ejemplo, sobre los impuestos locales, tan necesarios para el desarrollo de algunas islas.

Los abogados de la operación Fraport hacen valer el hecho de que la renovación de aeropuertos vetustos y poco acogedores –como el de Corfu y el de Santorini– exige inversiones que Atenas no puede permitirse. Pero otras soluciones hubieran sido posibles. Los créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) habrían podido servir para modernizar esas infraestructuras. Hubiera sido una ocasión de invertir de manera útil y duradera, y de asegurarle al Estado ingresos regulares y en constante progreso.

Para quienes se preocupan por la estabilización duradera de las finanzas públicas griegas, la operación Fraport representa claramente la peor de las opciones posibles. Podría decirse lo mismo de la mayoría de las diecinueve privatizaciones (gas, electricidad, el puerto de Tesalónica, etc.) realizadas o programadas en este país en crisis; a excepción quizás del sector inmobiliario del Estado, donde los inversores privados parecen querer utilizar sus compras para fines bastante útiles.

No sería acertado deducir que la conservación del sector público tal y como funcionaba antes hubiera sido la solución ideal. Pero entre las ofertas para los predadores internacionales y la economía del clientelismo, había lugar para una tercera opción. ■

1. Sol Trumbo Vila y Matthijs Peters, "The privatisation industry in Europe", Transnational Institute, Amsterdam, febrero de 2016.

2. Grupo informal constituido por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que impuso a los sucesivos gobiernos griegos varios planes de ajuste económico a cambio de nuevos préstamos.

3. Véase Pierre Rimbart, "Modèle social chinois au Pirée", y Panagiotis Grigoriou, "Visite guidée de la nouvelle Athènes", *Le Monde diplomatique*, París, febrero de 2013 y abril de 2014 respectivamente.

4. Estos detalles fueron revelados por el sitio independiente griego The Press Project.

5. Dimitris Copelouzos hizo fortuna en los sectores de la energía y las infraestructuras gracias a sus redes políticas en Grecia, pero también gracias a sus contactos con el grupo ruso Gazprom.

6. *Börsen-Zeitung*, Fráncfort, 27-2-16.

7. La lista de las condiciones impuestas a Grecia fue publicada por The Press Project.

*Responsable de la edición alemana de *Le Monde diplomatique*, donde se publicó una versión más extensa de este artículo. Traducción: María Julia Zaparrat

Archivo

La implosión de Syriza

por Baptiste Dericquebourg, N.º 195, septiembre de 2015.

Para humillar a Grecia

por Yanis Varoufakis, N.º 194, agosto de 2015.

Salir del euro

por Costas Lapavistas, N.º 193, julio de 2015.

El golpe de Estado silencioso

por Stelios Kouloglou, N.º 192, junio de 2015.